Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México; de ocho (08) de febrero de dos mil veinticuatro.

**VISTO el** expediente electrónico formado con motivo del recurso de revisión **10483/INFOEM/IP/RR/2022,** promovido por **XXX XXX XXX,** en su calidad de **RECURRENTE**, en contra de la respuesta del **Instituto de Salud del Estado de México**,en lo sucesivo el **SUJETO OBLIGADO,** se procede a dictar la presente resolución, con base en los siguientes:

# **ANTECEDENTES**

1. El dos (2) de mayo de dos mil veintidós, **EL RECURRENTE** presentó**,** ante el **SUJETO OBLIGADO** vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (**SAIMEX)**, la solicitud de información pública registrada con el número **00279/ISEM/IP/2022** mediante la cual solicitó lo siguiente:

*“SOLICITO ME REMITAN UNA LISTADO MENSUAL CON LAS ACTIVIDADES MAS RELEVANTES QUE HA REALIZADO LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCURA EN SALUD DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2021 A LA FECHA. SOLICITO ME INFORMEN CUAL ES EL NIVEL ACADEMICO Y/O PROFESIONAL DEL SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD, O EN SU CASO SI POR LO MENOS SABE LEER Y ESCRIBIR? SOLICITO ME INFORMEN CUAL ES EL PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN DE INFREAESTRCTURA EN SALUD PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020, 2021 Y LO QUE TIENE ASIGNADO PARA EL 2022. SOLICITO ME INFORMEN CUAL ES EL HORARIO Y DIAS QUE EL SUBDIRECTOR SE ENCUENTRA LABORARANDO EN SU OFICINA.”*

1. Señaló como modalidad de entrega de la información a través del **SAIMEX.**
2. El veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintidós, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud, en los siguientes términos:

*En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que:*

*Se da atención a su solicitud.*

*ATENTAMENTE*

*LIC. ELOINA SILVETTE DÍAZ GUTIÉRREZ*

* El Sujeto Obligado adjuntó los documentos electrónicos denominados:
* **208C0101320100L-7491-2022.pdf:** Oficio 208C0101320100L/7491/2022 suscrito por el Subdirector de Recursos humanos, mediante el cual refiere que se entrega en versión pública la información requerida.
* **208C0101320400L-2369-2022.pdf:** Oficio 208C0101320400L-002369/2022 suscrito por el Subdirector de Infraestructura en Salud, mediante el cual refiere lo siguiente:
* No lleva bitácoras de actividades;
* El Subdirector cuenta con los conocimientos necesarios para llevar a cabo el puesto encomendado;
* No existe el término gasto corriente;
* En cuanto al horario, radica en las necesidades del servicio.
* **279 saimex.pdf:** Oficio T.I/70/2022 mediante el cual proporciona el presupuesto gasto corriente asignado a la Subdirección de Infraestructura en Salud, de los años 2020, 2021 y 2022.
* **24052022 Respuesta sol 00279 2022 321 saimex.pdf:** Documento sin número de oficio, suscrito por el Jefe de la Unidad de información, Planeación, Programación y evaluación, mediante el cual refiere que se entrega la respuesta de las áreas correspondientes.
* **gerardo escamilla sol 279.pdf:** Documento que refiere que el Servidor Público se encuentra en proceso de Titulación.

1. El veintitrés (23) de mayo de dos mil veintidós, **EL RECURRENTE** interpuso el recurso de revisión, en contra de la respuesta y señaló como:

**Acto impugnado:** *“la respuesta brindada a la solicitud de información identificada con el numero de folio 00279/ISEM/IP/2022” (sic)*

**Motivos o razones de inconformidad: “***la autoridad responsable de la información se niega a brindar el listado de actividades que han realizado durante el periodo comprendido del 01 de enero de 2021 a la fecha, argumentado sin fundamento y con la notorio desconocimiento de la ley que dicha unidad administrativa no lleva una bitácora de actividades. asimismo, en la por lo que respecta a la solicitud del nivel académico o profesional del Subdirector de Infraestructura en Salud, me hacen una cordial invitación para q me conduzca con respecto; sin embargo los irrespetuosos e irresponsables es el propio Subdirector de infraestructura en Salud, pues trata de ocultar su falta de estudios y educación mencionando que tiene los conocimientos necesarios para llevar a cabo el puesto encomendado con un documento sin ningún tipo de validez oficial y sobre todo sin contestar la pregunta planteada, la cual fue muy simple y sencilla: ¿CUAL ES EL NIVEL ACADÉMICO Y / O PROFESIONAL DEL SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD? no si dicho servidor público considera que tiene los conocimientos para desempeñarse como tal; por lo que solicito que dicha pregunta me sea contestada con total certeza, no con simples apreciaciones subjetivas de una persona que evidencia su falta de preparación cultural. finalmente, tambien me inconformo en contra de la respuesta brindada a la pregunta relacionada con el horario y dias que el Subdirector se encuentra laborando en su oficina; toda vez que los servidores públicos encardados de dar respuesta a los planteamientos solamente mencionan que este radica en las necesidades del servicio; situación que resulta total y absolutamente absurda y evidencia una NEGATIVA a la solicitud planteada.” (sic)*

1. Se registró el recurso de revisión bajo el número de expediente al rubro indicado, asimismo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185 fracción I de la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios** se turnó a la **Comisionada María del Rosario Mejía Ayala,** con el objeto de su análisis.
2. La Comisionada Ponente con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185 fracción II de la ley de la materia, a través del acuerdo de admisión de fecha catorce (14) de junio de dos mil veintidós, puso a disposición de las partes el expediente electrónico vía **SAIMEX** a efecto de que en un plazo máximo de siete días manifestaran lo que a derecho convinieran, ofrecieran pruebas y alegatos según corresponda al caso concreto, de esta forma para que el **SUJETO OBLIGADO** presentara el informe justificado procedente.
3. De las constancias que obran en los expedientes electrónicos del SAIMEX; se aprecia que, tanto el Sujeto Obligado como el Recurrente fueron omisos en realizar manifestaciones, presentar alegatos o rendir su informe justificado; se inserta imagen de referencia:

**

1. Ante la omisión de rendir informe justificado, se tiene que dejó de justificar las razones o motivos que lo llevaron a no emitir la respuesta que ahora se impugna, generando con esta omisión el perjuicio en su contra ya que impide que esta Autoridad conozca y resuelva el presente recurso con mayor cautela si consideramos lo que al respecto ha señalado la autoridad jurisdiccional al emitir el siguiente criterio:

***QUEJA, RECURSO DE. LA OMISION DE RENDIR EL INFORME RESPECTIVO NO IMPIDE QUE SE RESUELV****A. El artículo 98 de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que las autoridades responsables omitan rendir el informe con justificación respecto de los actos materia de la queja y dispone que, en tales casos, la resolución correspondiente se dicte, con informe o sin él, dentro del término de los tres días siguientes a la vista que se dé al Ministerio Público. Lo dispuesto en el citado precepto legal, obliga a concluir que la falta de informe justificado de alguna autoridad responsable durante la tramitación del recurso de queja no es obstáculo para que se resuelva, y denota, asimismo, que la rendición del informe no constituye una formalidad esencial del procedimiento; de aceptar lo contrario, la resolución del recurso quedaría subordinada indefinidamente a la voluntad de las autoridades responsables en la queja, por ser claro que en tal supuesto, mientras ellas no rindieran el informe justificado, tampoco podría decidirse el recurso de queja. [TA] 2a. XXII/96. Segunda Sala. Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de 1996. Página: 207.*

1. Por lo cual se reitera, que la falta de informe justificado no impide que este Órgano Garante conozca y resuelva el recurso de revisión, solo propicia que el **SUJETO OBLIGADO** pierda la oportunidad de justificar su falta de respuesta y manifestar lo que a su derecho convenga.
2. El doce (12) de diciembre de dos mil veintidós, la Comisionada Ponente notificó el acuerdo mediante el cual se amplió el plazo para emitir resolución.
3. El veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro, se notificó el acuerdo mediante el cual se decretó el cierre de instrucción, por lo que turnó la presente resolución para su aprobación.
4. Este organismo garante no pasa por alto justificar, que el plazo para emitir resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos dentro del primer semestre del año dos mil veintidós, que, en comparación con los recibidos el año pasado dentro del mismo periodo, se ha incrementado aproximadamente un 400%, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.
5. Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en los elementos para medir su razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.
6. Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.
7. En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.
8. Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

a) Complejidad del asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.

b) Actividad Procesal del interesado: Acciones u omisiones del interesado.

c) Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.

d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.

1. De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.
2. Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.
3. Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.
4. Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.” consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

1. Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.

# **CONSIDERANDO**

## **PRIMERO. De la competencia**

1. Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver del presente recurso de conformidad con el artículo: 6, apartado A, fracción IV de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto fracciones IV y V de la **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México**; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios**; y 7, 9 fracciones I y XXIV, y 11 del **Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios**.

## **SEGUNDO. De la oportunidad y procedencia.**

1. El medio de impugnación fue presentado a través del SAIMEX en el formato previamente aprobado para tal efecto y dentro del plazo legal de quince días hábiles otorgados; siendo así que el **SUJETO OBLIGADO** entregó respuesta el veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintidós, de tal forma que el plazo para interponer el recurso de revisión transcurrió del veinticinco (25) de mayo al catorce (14) de junio de dos mil veintidós, el recurso de revisión fue interpuesto el dos (2) de junio de dos mil veintidós, éste se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipiosvigente.
2. Consecuencia de lo anterior, este Órgano Garante advierte que el escrito contiene las formalidades previstas por el artículo 180 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo que es procedente que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, conozca y resuelva el presente recurso.

# **TERCERO. Planteamiento de la Litis**

1. El recurrente solicitó la siguiente información:

* Listado mensual con las actividades más relevantes que ha realizado la subdirección de infraestructura en salud durante el periodo comprendido del 01 de enero de 2021 a la fecha.
* Nivel académico y/o profesional del subdirector de infraestructura en salud,
* Presupuesto de gasto corriente asignado a la subdirección de infraestructura en salud para el cumplimiento de sus funciones, durante el ejercicio fiscal 2020, 2021 y lo que tiene asignado para el 2022.
* Horario y días que el subdirector se encuentra laborando

1. El Sujeto Obligado entregó parcialmente la información requerida, tal como presupuesto.
2. El Recurrente se inconformó porque la información es incompleta.
3. Por lo tanto, el presente recurso de revisión se circunscribe en determinar si se actualiza las causales de procedenciacontenidas en el artículo 179 fracciones V, relativo a la entrega de información incompleta, de la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios**.

## **CUARTO. Estudio y Resolución del asunto.**

**I. De la atención a la solicitud de información.**

## **De la fuente obligacional**

1. El Derecho de Acceso a la Información Pública, es un derecho humano reconocido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19.2; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13.1; en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo quinto de la Particular del Estado de México, por lo que al respecto el **SUJETO OBLIGADO** debe ser cuidadoso del debido cumplimiento de las obligaciones constitucionales que se le imponen, en consecuencia, a todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, según lo dispone el tercer párrafo del artículo primero de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** al señalar la obligación de “promover, **respetar**, proteger y **garantizar** los derechos humanos”, entre los cuales se encuentra dicho derecho.
2. Definiendo el Derecho de Acceso a la Información Pública como: *La igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información[[1]](#footnote-1)en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal,[[2]](#footnote-2)*que se constituye como una herramienta fundamental para ejercer *el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas,[[3]](#footnote-3)*fomentando *la transparencia de las actividades estatales y* promoviendo *la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública,[[4]](#footnote-4)*que permite *saber qué están haciendo los gobiernos por sus pueblos, sin lo cual la verdad languidecería y la participación en el gobierno permanecería fragmentada.*
3. Se deduce que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano constitucionalmente reconocido, en consecuencia, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, funciones y atribuciones tienen la obligación de respetarlo, protegerlo y garantizarlo.

1. En tal sentido, el derecho de acceso a la información constituye una garantía primaria, tal y como lo señala el artículo 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y Municipios, que además, establece que se regirá *por los principios de simplicidad, rapidez gratuidad del procedimiento, auxilio y orientación a los particulares*, contemplando el derecho de las personas con discapacidad y hablantes de lengua indígena.
2. Es así que la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios,** cuyo objeto es establecer principios, bases generales y procedimientos para tutelar y garantizar la transparencia y el derecho humano de acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados; en su artículo 176establece que ***el recurso de revisión es la garantía secundaria mediante la cual se pretende reparar cualquier posible afectación al derecho de acceso a la información pública*, s**iendo éste el medio a través del cual, este Órgano Garante después de realizar el análisis al procedimiento de acceso a la información, podrá determinar la posible afectación y de ser el caso ordenar la reparación a la violación del derecho en cuestión.
3. Establecido lo anterior, resulta evidente que las razones o motivos de inconformidad hechos valer en el recurso de revisión resultan **fundadas y procedentes**, debido a que el **SUJETO OBLIGADO** proporcionó información que no corresponde con lo solicitado.
4. Ahora bien, para entender los alcances de la información pública se considera importante citar el criterio de interpretación en el orden administrativo número 0002-11, emitido por Acuerdo del Pleno de este Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno” el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto dispone:

***“CRITERIO 0002-11***

***INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN TEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 3, 4,11 Y 41.*** *De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración.*

*En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos:*

*Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados;*

*Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y*

*Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.”*

1. El derecho de acceso a la información encuentra su materia elemental en los documentos, y la Ley de Transparencia local nos brinda el siguiente concepto, para darnos un mejor panorama:

***XI. Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones,* ***oficios,*** *correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien,* ***cualquier otro registro*** *que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;*

1. Es así que, todos los actos de autoridad que realicen los Sujetos Obligados deben estar documentados y, bajo el más alto estándar de transparencia deberán poner toda la información que se encuentre en su posesión, a disposición de los particulares que la soliciten.
2. Resulta necesario referir que, el artículo 6° apartado A fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, guardan una estrecha relación, puesto que los ordenamientos citados concurren refiriendo que **los Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que se derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones,** considerando desde su origen la eventual publicidad y reutilización de la información que generen, posean o administren.
3. Además, debemos tomar en cuenta los artículos 4 y 12, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los cuales establecen lo siguiente:

***Artículo 4.*** *El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

*Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

*Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes.*

***Artículo 12.*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

*Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre.* ***La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.***

1. Es así que, por un lado se tiene la obligación de documentar todos los actos que se lleven a cabo en el ejercicio de sus funciones, atribuciones y competencias, mientras que por otro, se ven impuestos por la obligación de hacer pública toda aquella información que se encuentre en su posesión en estricto apego a los principios de eficacia[[5]](#footnote-5) y máxima publicidad, sobre éste último se debe poner mayor énfasis, puesto que establece que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados será pública, completa, oportuna y accesible, lo que permite que la ciudadanía tenga un amplio acceso sobre lo que es el actuar de las autoridades.
2. Robustece lo anterior la Tesis aislada identificada con la clave I.4º.A.40 A del Cuarto Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta en el libro XVIII, Marzo 2013, Página 1899.

***ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO.*** *Del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, que como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 54/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 743, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.", contiene una doble dimensión: individual y social. En su primer aspecto, cumple con la función de maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en el segundo, brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la rendición de cuentas. Por ello, el principio de máxima publicidad incorporado en el texto constitucional, implica para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa.*

*CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.*

*Amparo en revisión 257/2012. Ruth Corona Muñoz. 6 de diciembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.*

1. Como se ha señalado, los Sujetos Obligados deberán proporcionar toda la información que se encuentre en su posesión bajo los estándares más altos de transparencia y máxima publicidad.
2. Es pertinente enfatizar lo que respecto al derecho de acceso a la información pública, refiere el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte conducente señala:

***“Artículo 6o.*** *La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.* ***El derecho a la información será garantizado por el Estado.***

*Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.*

*Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:*

*A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:*

***I. Toda la información en posesión de******cualquier autoridad****, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal,* ***es pública*** *y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.* ***Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones****, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.*

*II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.*

*III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.*

*IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.*

***V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles****, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.*

*VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.*

*VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.*

*VIII. Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.*

*…*

*La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.”*

*(Énfasis añadido)*

1. Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en su artículo 5°, dispone en su parte conducente, lo siguiente:

***“Artículo 5. …***

***El derecho a la información será garantizado por el Estado****. La ley establecerá las previsiones que permitan asegurar la protección, el respeto y la difusión de este derecho.*

*Para garantizar el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, los poderes públicos y los organismos autónomos, transparentarán sus acciones, en términos de las disposiciones aplicables, la información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso.*

*Este derecho se regirá por los principios y bases siguientes:*

***I. Toda la información en posesión*** *de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y municipales, así como* ***del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados****, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal,* ***es pública*** *y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.*

*II. La información referente a la intimidad de la vida privada y la imagen de las personas será protegida a través de un marco jurídico rígido de tratamiento y manejo de datos personales, con las excepciones que establezca la ley reglamentaria.*

*III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.*

*IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante el organismo autónomo especializado e imparcial que establece esta Constitución.*

*V. Los procedimientos de acceso a la información pública, de acceso, corrección y supresión de datos personales, así como los recursos de revisión derivados de los mismos, podrán tramitarse por medios electrónicos, a través de un sistema automatizado que para tal efecto establezca la ley reglamentaria y el organismo autónomo garante en el ámbito de su competencia. Las resoluciones que correspondan a estos procedimientos se sistematizarán para favorecer su consulta.*

***VI. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos*** *y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y los resultados obtenidos.*

*VII. La ley reglamentaria, determinará la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o jurídicas colectivas.”*

(Énfasis añadido)

1. Adicional, tenemos que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, prevé en su artículo 23 fracción IV, lo siguiente:

***“Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder****:*

*I. El Poder Ejecutivo del Estado de México, las dependencias, organismos auxiliares, órganos, entidades, fideicomisos y fondos públicos, así como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México;*

***…***

***Los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos****,* ***así como******los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.***

***Los servidores públicos deberán transparentar sus acciones así como garantizar y respetar el derecho de acceso a la información pública.”***

*(Énfasis añadido)*

1. Es así que, conforme a los preceptos legales citados, se desprende que el derecho de acceso a la información pública es un derecho individual que puede ser ejercido ante cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo, tanto federales, como estatales, de la Ciudad de México, o Municipales, con el fin de que los particulares conozcan toda aquella información que es considerada como pública.
2. Por lo anterior, es de referir que, **el Instituto de Salud del Estado de México**, al ser un Sujeto Obligado comprendido por la Legislación Local en materia de Transparencia, se encuentra obligado a hacer pública toda aquella información que genere, administre o posea.

**II. De los agravios del particular.**

1. De la lectura a los motivos o razones de inconformidad que hizo valer el particular al momento de interponer el recurso de revisión, se aprecia que se duele porque la información es incompleta, señalando a la información que considera no le fue proporcionada, tal como actividades, nivel académico y horario y días de labores del servidor público con cargo de Subdirector de Infraestructura en Salud.
2. Tal y como se aprecia, el particular no se inconforma por la totalidad de los servidores públicos señalados, en consecuencia, la información de la que no se inconformó, relativa a presupuesto, debe considerarse como requerimientos atendidos, pues se entiende que la parte Recurrente ésta conforme con la información entregada al no contravenir la misma. Sirve de Apoyo a lo anterior, por analogía la Tesis Jurisprudencial Número 3ª./J.7/91, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 174,177, que establece lo siguiente:

***“REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES.*** *Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquéllos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente.”*

1. Consecuentemente, se reitera, que la parte de la respuesta que no fue impugnada debe declararse consentida por la parte Recurrente, toda vez que no se realizaron manifestaciones de inconformidad, por lo que no pueden producirse efectos jurídicos tendentes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado ya que se infiere un consentimiento ante la falta de impugnación eficaz.
2. Sirve de sustento a lo anterior por analogía la tesis jurisprudencial número VI.3o.C. J/60, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 176,608 que a la letra dice:

***“ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO.*** *Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz.”*

1. Por lo tanto, el análisis del presente asunto en particular se basará en los requerimientos que fueron motivo de agravio para el particular, siendo los siguientes elementos:

* Listado mensual con las actividades más relevantes que ha realizado la subdirección de infraestructura en salud durante el periodo comprendido del 01 de enero de 2021 a la fecha.
* Nivel académico y/o profesional del subdirector de infraestructura en salud,
* Horario y días que el subdirector se encuentra laborando

**III. Actividades de la Subdirección de Infraestructura en Salud.**

1. El Sujeto Obligado refirió, a través de la Subdirección de Infraestructura en Salud que, no se lleva una bitácora de actividades, por lo tanto, no se cuenta con la obligación de generar la información ni procesarla conforme al interés del particular.
2. Primeramente, es necesario enfatizar que, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y Municipios, en el artículo 4 y 12 establecen los siguiente:

“***Artículo 4.*** *El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

***Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.***

*Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información* *que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes.”*

*(Énfasis añadido)*

***Artículo 12.*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública**serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

***Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos*** *y en el estado en que ésta se encuentre. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.”*

(Énfasis añadido)

1. De los preceptos legales en cito, se desprende que, los Sujetos Obligados deben poner a disposición de cualquier persona que lo solicite, toda la información que obre en sus archivos y en el estado en que se encuentre, no comprende la obligación de procesar, ni presentarla conforme a los intereses del particular.
2. En síntesis, el derecho de acceso a la información pública se satisface en aquellos casos en que se entregue el soporte documental en que conste la información pública, toda vez que los Sujetos Obligadosno tienen el deber de generar, poseer o administrar la información pública con el grado de detalle que se señala en la solicitud de información pública; esto es, que no tienen el deber de generar un documento ***ad hoc***, para satisfacer el derecho de acceso a la información pública.
3. Como apoyo a lo anterior, es aplicable el Criterio 09-10, emitido por el Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que dice:

*“****Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para responder una solicitud de acceso a la información.*** *Tomando en consideración lo establecido por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, sino que deben garantizar el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada.*

*Expedientes:*

*0438/08 Pemex Exploración y Producción – Alonso Lujambio Irazábal*

*1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. – María Marván Laborde*

*2868/09 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – Jacqueline Peschard Mariscal*

*5160/09 Secretaría de Hacienda y Crédito Público – Ángel Trinidad Zaldívar*

*0304/10 Instituto Nacional de Cancerología – Jacqueline Peschard Mariscal”*

(Énfasis añadido)

1. Si bien es cierto, la ley no prevé la elaboración de documentos ad hoc para la atención a las solicitudes de acceso a la información pública, pero también lo es que no lo prohíbe, en consecuencia, los Sujetos Obligados están en posibilidad de elaborar documentos para la atención de las solicitudes, siempre que se cumplan con todos los requerimientos formulados.
2. En el presente requerimiento, el particular desea conocer las actividades que realizó el Subdirector de Infraestructura en Salud del uno de enero de dos mil veintiuno al dos (2) de mayo de dos mil veintitrés, esto de manera mensual y sólo las más relevantes.
3. El Sujeto Obligado, a través de la Subdirección de Infraestructura en Salud manifestó que no se cuenta con bitácoras mensuales de actividades; sin embargo, es necesario traer a contexto el Manual de Organización del Sujeto Obligado, el cual refiere lo siguiente:

***2I7B32400 SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD***

***OBJETIVO:***

***Ejecutar y dar seguimiento a los programas*** *de construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura en salud, del equipo médico y electromecánico,* ***con la finalidad de mantener la infraestructura en niveles de operación aceptables, aplicando criterios de protección del medio ambiente.***

*FUNCIONES:*

***Ejecutar el programa en materia de construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura del Instituto, con base en los requerimientos de las unidades aplicativas, los lineamientos de planeación, la normatividad de obra pública aplicable, así como la disponibilidad presupuestal.***

***Gestionar*** *ante las Subdirecciones de Información, Planeación, Programación y Evaluación y de Tesorería y Contabilidad del Instituto,* ***la liberación de los recursos federales y estatales,*** *para la ejecución de las obras en lo que corresponde al pago de estimaciones, órdenes de pago y anticipos.*

***Recibir y atender las solicitudes de obras****, conservación y mantenimiento de infraestructura, equipo médico y electromecánico que le presenten las unidades aplicativas del Instituto de acuerdo a los programas emitidos por la Subdirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación del Instituto.*

***Dirigir, aprobar*** *a través del Departamento de Construcción y Supervisión de Obras y vigilar a través de la unidad aplicativa responsable,* ***el cumplimiento del programa de cada obra o acción de conservación y mantenimiento ejecutada por la subdirección.***

*Recibir de la Subdirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación, la actualización del Plan Estatal Maestro de Infraestructura en Salud para la Población Abierta (PEMISPA).*

*Avalar para su pago las estimaciones y finiquitos de obra y de mantenimiento de equipo médico, electromecánico y de instalaciones especiales de las unidades de atención médica del Instituto, que presenten las empresas contratistas y remitirlas a la Subdirección de Tesorería y Contabilidad.*

***Presentar a dictaminación*** *o para su conocimiento del Comité Interno de Obras,* ***las propuestas de las diferentes empresas contratistas*** *participantes que cumplieron con los requisitos establecidos en las bases de los concursos.*

***Presentar para revisión, opinión y dictaminación del Comité Interno de Obras Públicas, los documentales derivados del proceso de adjudicación de las obras por ejecutar en el Instituto.***

***Informar a las empresas*** *contratistas participantes en los concursos de las obras que realiza el Instituto,* ***el fallo del Comité de Obras Públicas****, a efecto de realizar el proceso de contratación de conformidad con la normatividad aplicable en la materia a través del Departamento de Concursos, Co tratos y Estimaciones.*

***Efectuar el seguimiento en la aplicación de los recursos asignados a las obras y acciones de mantenimiento de infraestructur****a y equipo médico y electromecánico que realice el Instituto.*

***Atender y solventar los requerimientos que realicen los órganos de control en materia de auditorías relacionadas con la administración de la obra pública.***

*Proporcionar la información necesaria que le requiera la Unidad de Modernización Administrativa, con el propósito de instrumentar proyectos de modernización administrativa en el Instituto.*

*Difundir y vigilar la aplicación de los manuales administrativos de su área de responsabilidad.*

***Vigilar la elaboración de las convocatorias para las reuniones del Comité de Obras y enviarlas a los miembros del mismo.***

***Vigilar la integración y actualización de los expedientes técnicos*** *de las diferentes obras que se ejecutan en el Instituto, con financiamiento estatal y/o federal, a través del Departamento de Precios Unitarios, de conformidad con lo dispuesto en normatividad aplicable y presentarlo a las instancias correspondientes.*

***Verificar,*** *a través del Departamento de Precios Unitarios,* ***la actualización de los catálogos de precios unitarios para obra nueva, conservación y mantenimiento de infraestructura,*** *equipo médico y electromecánico, de acuerdo con los costos de materiales, equipo, herramienta y mano de obra vigentes.*

***Verificar,*** *a través de la unidad aplicativa responsable,* ***el registro*** *ante la Secretaría del Agua y Obra Pública,* ***de las empresas contratistas aspirantes a participar en los procedimientos de licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa*** *de las obras a ejecutar en el Instituto y verificar la integración del padrón interno con base en los registros referidos.*

*Vigilar, a través de las unidades aplicativas responsables, que los procesos de licitación, adjudicación, contratación y ejecución de las obras de construcción, conservación y mantenimiento de obras, equipo médico y electromecánico del Instituto, se realicen de acuerdo con los montos y normatividad aplicable en la materia.*

*Vigilar, a través de las unidades aplicativas responsables, que las obras que contrata el Instituto se realicen de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas, así como de calidad y tiempo indicado en los contratos correspondientes.*

*De arrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.*

1. De lo anterior, se advierten diversas acciones o actividades que están a cargo de la Subdirección de Infraestructura en Salud para el debido cumplimiento de las atribuciones que le fueron conferidas, lo cual se refuerza con el Reglamento Interno del Sujeto Obligado en el artículo 41, el cual señala lo siguiente:

*Artículo 41.- Corresponde a la Subdirección de Infraestructura en Salud:*

*I****. Realizar, ejecutar y dar seguimiento al programa de obra pública*** *del Instituto, considerando los lineamientos y normatividad jurídica vigente en la materia.*

*II****. Realizar estudios de factibilidad técnica, social y económica*** *de la obra pública en materia de salud y de los servicios relacionados con la misma.*

***III. Gestionar la liberación de recursos*** *federales y estatales para la realización de pagos por concepto de estimaciones, órdenes de pago y anticipos por obra pública.*

***IV. Conciliar y autorizar las estimaciones de obra y servicios*** *relacionados con la contratación de la misma, así como la amortización de los anticipos en términos de la legislación aplicable y lo suscrito en los contratos respectivos.*

***V. Vigilar que los procesos de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa en materia de obra pública, se realicen conforme a las normas jurídicas vigentes y de acuerdo con las bases de concurso autorizadas.***

*VI. Promover y participar en la formulación y actualización de los modelos de contrato de obra pública y servicios relacionados con la misma.*

***VII. Autorizar los proyectos y especificaciones técnicas*** *de los mismos, conjuntamente con la Coordinación de Salud y la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.*

***VIII. Iniciar, supervisar, controlar, dar seguimiento y evaluar hasta su conclusión, la obra pública y los servicios relacionados con la misma.***

***IX. Informar a las dependencias competentes del Ejecutivo del Estado el inicio, avance, conciliación y entrega recepción de las obras públicas que contrate el Instituto.***

***X. Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de las especificaciones de seguridad, calidad y oportunidad*** *establecidas en la normatividad correspondiente en materia de obra*

***XI. Documentar e informar a las unidades administrativas del Instituto de la suspensión temporal de las obras que lleve a cabo.***

*XII. Revisar y conciliar los precios unitarios y extraordinarios que se presentan durante la ejecución de la obra pública y servicios relacionados con la misma.*

***XIII. Elaborar y gestionar la formalización de los contratos de obra pública*** *y servicios relacionados con la misma y verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los contratistas, así como realizar su registro y control hasta concluir la relación contractual.*

*XIV. Realizar las acciones necesarias a efecto de aplicar las penas convencionales o sanciones que procedan a los contratistas por incumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos celebrados, así como para hacer efectivas las garantías otorgadas, sometiendo a consideración del Director de Administración o del Coordinador de Administración y Finanzas, según corresponda, la resolución respectiva, en términos de las disposiciones aplicables.*

*XV. Las demás que le confieren otras disposiciones legales.*

1. Es así que, la normatividad en la materia nos permite identificar que a la Subdirección de Infraestructura de Salud, le corresponde vigilar, ejecutar, verificar e informar lo relacionado con las obras que se realicen en el sector, así como de elaborar y dar seguimiento a los programas de construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura.
2. Entonces, al contar expresamente con dichas atribuciones es que se determina que tiene la obligación de documentar tos los actos de autoridad que emanen de las funciones, atribuciones y competencias que realiza y que se relacionan directamente con el cargo que ostenta como servidor público, pues dicha información es de carácter público y si bien, no se cuenta con la obligaciones de elaborar informes o bitácoras mensuales al grado de desagregación que solicitó el particular, el Sujeto Obligado tiene el deber de documentar las acciones que realiza en función del cargo que ostenta, por lo que se determina la existencia de la información, asimismo, se privilegia el derecho de acceso a la información del particular, en consecuencia, se ordena al Sujeto Obligado entregue los documentos donde consten las actividades realizadas por la Subdirección de Infraestructura en Salud, del periodo comprendido del uno (1) de enero de dos mil veintiuno al dos (2) de mayo de dos mil veintidós.
3. De ser el caso de que la información que se ordena entregar contenga datos personales susceptibles de clasificarse como confidenciales, el Sujeto Obligado estará a lo dispuesto en el Considerando QUINTO de la presente resolución.

IV. **Nivel o grado académico**

1. Por lo que corresponde al nivel académico y/o profesional del Servidor Público con Cargo de Subdirector de Infraestructura, el Sujeto Obligado se limitó a referir que cuenta con los conocimientos suficientes para desempeñar el cargo, sin embargo, no señaló el grado de estudios con los que cuenta, así como tampoco entregó el soporte documental correspondiente.
2. Es importante mencionar que, de manera enunciativa más no limitativa, los documentos que pudieran dar atención al requerimiento es el Título, cédula profesional o, incluso la ficha curricular o curriculum vitae, toda vez que contienen, entre otra información, el último grado de estudios, **la preparación académica**, laboral y méritos con los que cuentan los servidores públicos para ocupar un cargo público. Se cita lo que dispone la Real Academia de la Lengua Española define como currículum vitae:

**“*currículum vítae****.****1.****Loc. lat. que significa literalmente ‘carrera de la vida’. Se usa como locución nominal masculina para designar la relación de los datos personales,* ***formación académica****, actividad laboral y méritos de una persona.*”

1. De la interpretación a esta definición se desprende que tanto la ficha curricular como el curriculum vitae están relacionados con la hoja de vida, carrera de vida o currícula de una persona, donde se podría apreciar la preparación académica y laboral que tiene, además de los méritos como bien lo podrían ser cursos o certificaciones.
2. Por ende, la ficha curricular o currículum vítae puede existir información más detallada y relacionada con la **trayectoria académica o profesional,** debiendo conservar los documentos soporte como puede ser certificado de estudios, **título profesional o cédula profesional** o el documento que avale el grado académico de los servidores públicos, los cuales son susceptibles de proporcionarse en versión pública.
3. Además, el currículum vitae o ficha curricular forman parte de las obligaciones d transparencia común que todos los Sujetos Obligados deben publicar periódicamente en sus portales IPOMEX, según lo dispuesto en el artículo 92, fracción XXI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y Municipios, disponen lo siguiente:

***Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios***

*“****Artículo 92****. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:*

*(…)*

***XXI.******La información curricular****, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso,* ***las sanciones administrativas de que haya sido objeto****;*

(Énfasis añadido)”

1. Por lo que corresponde al Título profesional, este es definido, es definido a través de la Real Academia de la Lengua Española, en su quinta acepción como el *“Testimonio o instrumento dado para ejercer un empleo, dignidad o profesión”*, y encuentra su génesis jurídico, en el párrafo segundo, del artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como una limitación al libre ejercicio de profesional:

*Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.*

***La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo***

***…***

1. Así la Carta Magna, otorga facultades a las entidades federativas a determinar las profesiones que requieren de título universitario, para su ejercicio, para lo cual, debemos remitirnos a la legislación local, que, en el Estado de México, se naturaliza a través del Reglamento de Inscripción de Títulos Profesionales, Diplomas de Especialidad y Grados Académicos del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 25 de marzo de 2022, que define la cédula profesional y el título universitario en su artículo 3°, fracciones I y IX, de la siguiente manera:

*Artículo 3. Para efectos de este Reglamento, se entiende por:*

*I. Cédula Profesional: A la cédula física o electrónica, con efectos de patente para el ejercicio profesional;*

*…*

*IX. Título Profesional: Al documento oficial otorgado por institución educativa facultada legalmente para ello, a favor de la persona que haya concluido los estudios académicos y demostrado tener los conocimientos necesarios para su ejercicio profesional.*

1. Además, el propio Reglamento, en su artículo 16, contempla la obligación a las Instituciones Educativas, a inscribir los títulos profesionales para su validez.

*Artículo 16. Las Instituciones Educativas de los tipos Medio Superior y Superior, dependientes de la Secretaría, los organismos descentralizados que impartan estos tipos de estudios y los particulares que cuenten con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Estatal, están obligadas a inscribir los Títulos Profesionales, Diplomas de Especialidad y Grados Académicos de sus egresados, ante la Subdirección de Profesiones, dentro del plazo de veinte días hábiles a partir de su expedición, conforme a lo establecido en el Capítulo Tercero de este Reglamento.*

1. Así, los títulos no son válidos solo con su expedición, sino que es necesaria la inscripción de estos para su validez, por lo cual, la exhibición del documento, se considera, debe ser de manera íntegra para que se valide su capacidad profesional.
2. Estos elementos otorgan certeza a la calidad profesional y acreditan la idoneidad para el ejercicio de funciones, que puedan desempeñar en el ejercicio de su encargo en calidad de servidores públicos.
3. Ahora bien, a través de un análisis sistemático de la Ley, debemos afirmar, que los profesionistas que ejerzan su profesión, deberán cumplir con todos los requisitos que contemple la Ley, pues lo cierto es que incumplir con estos elementos, cuando se ostenta la calidad de profesionista, constituye un delito al actualizarse el tipo penal, contemplado en el artículo 176, fracción II, del Código Penal del Estado de México, que contempla:

***CAPITULO VI***

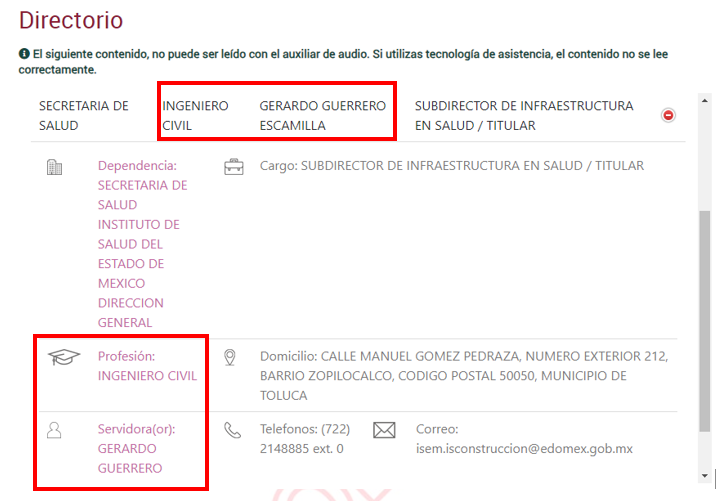
***USURPACION DE FUNCIONES PÚBLICAS O DE PROFESIONES***

*Artículo 176.- Comete este delito el que:*

*…*

***II. Se atribuya o acepte por cualquier medio el carácter de profesionista o grado académico sin tener título legal o ejerza los actos propios de una profesión sin título o sin autorización legal;***

1. De lo anterior se coligue que, el Sujeto Obligado cuenta con fuente obligacional para generar, administrar y poseer la información requerida por el Particular, además, que se localizó, en la página oficial del Sujeto Obligado, en el apartado “Directorio”, la siguiente información:



1. Tal y como se aprecia, el Servidor Público que ostenta el cargo de Subdirector de Infraestructura en Salud, tiene como profesión Ingeniería Civil, por lo que, al ostentarse así en páginas o sitios oficiales, el Sujeto Obligado debe corroborar dicha aseveración, conservando el documento que avale el grado de estudios correspondiente en el expediente de Personal.
2. En consecuencia, al determinarse la existencia de la información que fue solicitada, es que se ORDENA entregar el documento que avale la Ingeniería Civil del Subdirector de Infraestructura en Salud, de ser el caso en versión pública, para tal efecto estará a lo dispuesto en el Considerando QUINTO de la presente resolución.

**V. Horario y días de labores.**

1. Sobre este punto en particular, el Sujeto Obligado se limitó a mencionar que el horario y días de labores radica en las necesidades del servicio.
2. Es importante mencionar que, en la atención de las solicitudes de acceso a la información pública, los Sujetos Obligados deben apegarse a lo que dispone el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual contiene los siguiente:

*Artículo 11.* ***En la*** *generación, publicación y* ***entrega de información se deberá garantizar que ésta sea******accesible****, actualizada,* ***completa****, congruente, confiable, verificable, veraz,* ***integral****, oportuna y expedita, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberá estar definido y ser además legítima y estrictamente necesaria en una sociedad democrática, por lo que atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona.*

1. Pues la entrega de la información que realizó el Sujeto Obligado, respecto del al horario y días de labores no permite conocer el mismo, ya que la manifestación que realizó no especifica un horario laboral o jornada laboral, lo que impide conocer la hora de entrada y hora de salida establecida, así como los días que ha de laborar dicho servidor público.
2. Los Sujetos Obligados deben verificar que la información a entregar cumpla con las características y cualidades que establece el referido artículo 11, entre las cuales, en este caso en particular destaca la accesibilidad. En relación al artículo 22 de la misma Ley, el cual establece:

***Artículo 22. En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la información se propiciarán las condiciones necesarias para que ésta sea accesible a cualquier persona****, de conformidad con el artículo 5 de la Constitución Local y demás disposiciones de la materia.*

1. Al establecer “condiciones necesarias para que esta sea accesible”, abarca muchos factores, algunos más complejos y específicos como accesibilidad a personas con discapacidad o lenguas indígenas, como algunos más simples, como en el presente asunto en particular, que la información contenga lo requerido. Pues se puede apreciar a simple vista que la documentación remitida en respuesta en relación al requerimiento en análisis impide que el Recurrente conozca y tenga acceso a la información que solicitó.
2. La información que proporcionen los Sujetos Obligados para dar cumplimiento al derecho de acceso a la información deben ser claros y precisos cumpliendo los principios rectores del derecho de acceso a la información pública. De lo contrario se restringe de manera ilegítima el derecho de los particulares al impedirles conocer el contenido de los documentos.
3. Para analizar correctamente la fuente obligacional del Sujeto Obligado para generar, administrar y poseer la información requerida por el Particular, es necesario traer a contexto la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios en los artículos 45 y 48, los cuales disponen lo siguiente:

*ARTÍCULO 45.-* ***Los servidores públicos prestarán sus servicios mediante nombramiento****, contrato o formato único de Movimientos de Personal expedidos por quien estuviere facultado legalmente para extenderlo.*

*…*

*ARTÍCULO 48. Para iniciar la prestación de los servicios se requiere:*

*I.* ***Tener conferido el nombramiento****,* ***contrato respectivo o formato único de Movimientos de Personal;***

*II. Rendir la protesta de ley en caso de nombramiento; y*

***III. Tomar posesión del cargo.***

1. De lo anterior, se aprecia que, para iniciar la prestación de servicios en el servicio público, es necesario tener conferido un nombramiento, contrato o formato único de movimientos de personal. El artículo 49 de la citada ley indica los elementos que debe contener el nombramiento de los servidores públicos, siendo los siguientes:

***CAPITULO II***

***De los Nombramientos***

*ARTÍCULO 49.- Los nombramientos, contratos o formato único de Movimientos de Personal de los servidores públicos deberán contener:*

*I****. Nombre completo del servidor público;***

***II. Cargo para el que es designado, fecha de inicio de sus servicios y lugar de adscripción;***

*III. Carácter del nombramiento, ya sea de servidores públicos generales o de confianza, así como la temporalidad del mismo;*

*IV. Remuneración correspondiente al puesto;*

***V. Jornadade trabajo;***

*VI. Derogada;*

1. Entre los elementos que debe contener el nombramiento de los servidores públicos, se encuentra el nombre, cargo **y la jornada de trabajo**; **es decir el periodo o espacio de tiempo por el cual el servidor público prestará su servicio al ente público del que se trate**, lo que se robustece con lo establecido en los artículos 56 y 59 del mismo ordenamiento legal, que dispone lo siguiente:

*“****ARTÍCULO 56****. Las condiciones generales de trabajo, establecerán como mínimo:*

***I. Duración de la jornada de trabajo;***

*…*

***ARTÍCULO 59.******Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el servidor público está a disposición de la institución pública para prestar sus servicios****.* ***El horario de trabajo será determinado conforme a las necesidades del servicio de la institución pública o dependencia****, de acuerdo a lo estipulado en las condiciones generales de trabajo, sin que exceda los máximos legales”.*

1. En ese contexto, la duración de la jornada de trabajo puede ser de varias maneras, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 60, 61, 62 y 63 de la mencionada Ley de Trabajo que literalmente señalan lo siguiente:

***“ARTÍCULO 60****. La jornada de trabajo puede ser diurna, nocturna o mixta, conforme a lo siguiente:*

***I. Diurna, la comprendida entre las seis y las veinte horas;***

***II. Nocturna, la comprendida entre las veinte y las seis horas; y***

***III. Mixta, la que comprenda períodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y media, pues en caso contrario, se considerará como jornada nocturna.***

***ARTÍCULO 61.*** *Cuando la naturaleza del trabajo así lo exija, la jornada se reducirá teniendo en cuenta el número de horas que pueda trabajar un individuo normal sin sufrir quebranto en su salud.*

***ARTÍCULO 62.******Por cada seis días de trabajo el servidor público disfrutará de uno de descanso con goce de sueldo íntegro****. Cuando proceda, se podrán distribuir las horas de trabajo, a fin de permitir a los servidores públicos el descanso del sábado o cualquier modalidad equivalente.*

***ARTÍCULO 63.*** *El servidor público tendrá derecho a un descanso de media hora cuando trabaje horario continuo de más de siete horas y cuando menos de una hora, en horario discontinuo. Cuando el servidor público no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante la hora de descanso o de comidas, el tiempo correspondiente le será considerado como tiempo efectivo de trabajo.”*

1. De lo anterior, se concluye que se establecen algunos supuestos para la duración de la jornada de trabajo, así como los días que ha de laborar el servidor público, ya que se constituye como una obligación en la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, en su artículo 88 fracción III y VI, que literalmente indica:

***“ARTÍCULO 88.*** *Son obligaciones de los servidores públicos:*

*…*

***III. Asistir puntualmente a sus labores y no faltar sin causa justificada o sin permiso****. En caso de inasistencia, el servidor público deberá comunicar a la institución pública o dependencia en que presta sus servicios, por los medios posibles a su alcance, la causa de la misma dentro de las 24 horas siguientes al momento en que debió haberse presentado a trabajar. No dar aviso, hará presumir que la falta fue injustificada;*

*…*

*VI. Cumplir con las obligaciones que señalan las condiciones generales de trabajo;”*

1. Es así que, los servidores públicos tienen la obligación de cumplir con la jornada y horario laboral que sea estipulado en su nombramiento, contrato o formato único de movimientos de personal, de lo contrario, puede ser motivo de recisión laboral, tal y como lo establece el artículo 93, en sus fracciones V, I y XVII de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios:

***“ARTÍCULO 93.*** *Son causas de rescisión de la relación laboral, sin responsabilidad para las instituciones públicas:*

*…*

***V. Incurrir en cuatro o más faltas de asistencia a sus labores sin causa justificada, dentro de un lapso de treinta día****s;*

***VI. Abandonar las labores sin autorización previa o razón plenamente justificada, en contravención a lo establecido en las condiciones generales de trabajo****;*

*…*

*XVII. Sustraer tarjetas o listas de puntualidad y asistencia del lugar destinado para ello, ya sea la del propio servidor público o la de otro, utilizar o registrar asistencia con gafete-credencial o tarjeta distinto al suyo o alterar en cualquier forma los registros de control de puntualidad y asistencia; siempre y cuando no sea resultado de un error involuntario;”*

1. Entonces, al ser una obligación el cumplir con el horario laboral y días laborales para realizar las actividades propias del cargo que les fue conferido, es que se tiene la obligación de contar con dicha información, en consecuencia, se ORDENA entregar el documento donde conste el horario y días laborales del Subdirector de Infraestructura en Salud al dos (2) de mayo de dos mil veintidós.
2. Ahora bien, de ser el caso de que la información que se ordena entregar contenga datos personales susceptibles de clasificarse como información confidencial, el Sujeto Obligado estará a lo dispuesto en el Considerando QUINTO de la presente resolución.

**VI. De las manifestaciones subjetivas.**

1. Este Órgano Garante no pasa desapercibido que el particular al momento realizar la solicitud de acceso a la información, así como el posterior recurso de revisión, realizó una serie de manifestaciones subjetivas que no pueden ser atendidas a través del derecho de acceso a la información pública.
2. Por lo anterior, debe precisarse que se trata de manifestaciones unilaterales subjetivas de la parte recurrente en ejercicio del derecho de libertad de expresión, las cuales resultan inatendibles, ya que este Instituto en términos del artículo 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y de las demás disposiciones jurídicas aplicables, carece de facultades para pronunciarse sobre las mismas.
3. No obstante, este Órgano Garante no es omiso en señalar que, el derecho constitucional del ejercicio de la libertad de expresión, no implica para los particulares el uso de frases y expresiones que sean absolutamente vejatorias, que sean **ofensivas u** **oprobiosas**, según el contexto, o bien, **impertinentes para expresar opiniones** o informaciones, **teniendo relación o no con lo manifestado**, por lo que, insta al recurrente para que se conduzca con respeto en sus expresiones. En apoyo a lo anterior, resulta aplicable por analogía la Jurisprudencia con número de registro 2003302, de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 537, libro XIX, Tomo 1, de abril de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del tenor literal siguiente:

*“****LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA CONSTITUCIÓN NO RECONOCE EL DERECHO AL INSULTO****.****Si bien es cierto que****cualquier individuo que participe en un debate público de interés general debe abstenerse de exceder ciertos límites, como el respeto a la reputación y a los derechos de terceros, también lo es que****está permitido recurrir a cierta dosis de exageración, incluso de provocación****, es decir, puede ser un tanto desmedido en sus declaraciones,****y es precisamente en las expresiones que puedan ofender, chocar, perturbar, molestar, inquietar o disgustar donde la libertad de expresión resulta más valiosa****. Así pues, no todas las críticas que supuestamente agravien a una persona, grupo, o incluso a la sociedad o al Estado pueden ser descalificadas y objeto de responsabilidad legal, aunque el uso de la libertad de expresión para criticar o atacar mediante el empleo de términos excesivamente fuertes y sin articular una opinión, puede conllevar una sanción que no resultaría violatoria de la libertad de expresión.****En este sentido, es importante enfatizar que la Constitución****Política de los Estados Unidos Mexicanos****no reconoce un derecho al insulto****o a la injuria gratuita, sin embargo, tampoco veda expresiones inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, aun cuando se expresen acompañadas de expresiones no verbales, sino simbólicas.****Consecuentemente, el derecho al honor prevalece cuando la libertad de expresión utiliza frases y expresiones que están excluidas de protección constitucional****, es decir,****cuando sean absolutamente vejatorias****, entendiendo como tales las que sean:****a) ofensivas u oprobiosas, según el contexto; y, b) impertinentes para expresar opiniones o informaciones, según tengan o no relación con lo manifestado****. Respecto del citado contexto, su importancia estriba en que la situación política o social de un Estado y las circunstancias concurrentes a la publicación de la nota pueden disminuir la significación ofensiva y aumentar el grado de tolerancia.*

*Amparo directo 28/2010. Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. 23 de noviembre de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien reservó su derecho a formular voto particular; José Ramón Cossío Díaz reservó su derecho a formular voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.*

*Amparo directo 25/2010. Eduardo Rey Huchim May. 28 de marzo de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López.*

*Amparo directo 26/2010. Rubén Lara León. 28 de marzo de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras.*

*Amparo directo 8/2012. Arrendadora Ocean Mexicana, S.A. de C.V. y otros. 4 de julio de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia; José Ramón Cossío Díaz reservó su derecho para formular voto concurrente; Olga Sánchez Cordero de García Villegas también reservó su derecho a formular voto concurrente por lo que respecta al apartado XI. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.*

*Amparo directo 16/2012. Federico Humberto Ruiz Lomelí. 11 de julio de 2012. Cinco votos; José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea reservaron su derecho a formular voto concurrente. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.*

*Tesis de jurisprudencia 31/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintisiete de febrero de dos mil trece.”*

(Énfasis añadido)

1. Lo anterior, en relación al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone lo siguiente:

*Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición,* ***siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa****; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.*

*A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.*

1. Es así que, en el ejercicio del derecho de petición, así como del acceso a la información pública, los ciudadanos deberán conducirse de manera pacífica y con respeto.

**QUINTO. De la versión pública.**

# **Nociones generales.**

1. Debe destacarse que, debido a la naturaleza de la información solicitada**,** eventualmente pudiera obrar datos personales susceptibles de protegerse, así como información susceptible de clasificarse como reservada, el **Sujeto Obligado** deberá de hacer la adecuada versión pública, protegiendo los datos que no son susceptibles de ser proporcionados.
2. No pasa desapercibido para este Órgano Garante que los **Sujetos Obligados** serán responsables de los datos personales en su posesión y que, en caso de localizarse datos concernientes a terceros, éstos no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales. Cabe destacar que, para la realización de la clasificación de la información, se deben seguir una serie de pasos y procedimientos, por lo que es menester reiterar los mismos:

|  |  |
| --- | --- |
| a) Requisitos previos. | Los artículos 100 y 122 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que si los Sujetos Obligados determinan que la información actualiza alguno de los supuestos de clasificación, es deber de los titulares de las áreas proponer su clasificación y no del Comité de Transparencia.  Al hacerlo tienen que precisar de qué información se trata, señalando el supuesto de clasificación (confidencialidad o reserva).  Además, se debe señalar el procedimiento, de los tres que establecen los artículos 132 y 106 de la Ley Estatal y General, respectivamente.  El último de estos requisitos previos consiste en que no se pueden emitir acuerdos de carácter general ni particular, esto es, no se puede hacer un acuerdo para clasificar de manera general todos los documentos de un expediente o área, sin individualizar su análisis y tampoco se puede hacer un acuerdo por cada dato que se vaya a clasificar dentro de un documento con diez datos, por ejemplo, susceptibles de ser clasificados. |
| b) Supuestos de clasificación. | Las disposiciones constitucionales y legales en la materia establecen los dos supuestos generales para clasificar la información: por reserva y por confidencialidad.  Los artículos 116 y 143 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan los supuestos para que la información pueda ser clasificada como confidencial. Mientras que los artículos 105 y 130 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que la aplicación de estos supuestos debe realizarse de manera restrictiva y limitada, por lo que debe acreditarse que se cumple con esta condición y no se pueden ampliar las excepciones o supuestos de clasificación aduciendo analogía o mayoría de razón.  El **Sujeto Obligado** debe identificar claramente el tipo de información y hacer un juicio de subsunción o encaje para acreditar que el supuesto de hecho corresponde estrictamente con la hipótesis jurídica. Esto también lo debe de realizar el servidor público habilitado y el titular del área que administra la información. |
| c) Formalidades para emitir el acuerdo de clasificación. | El Comité de Transparencia, según lo dispuesto en los artículos cuenta con las facultades para aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información que haya propuesto.  Es necesario que **el acto reúna con los requisitos elementales**, entre ellos, que la autoridad que va a emitir el acto de autoridad sea la legalmente facultada para ello.  La decisión de aprobar, modificar o revocar la clasificación deberá de asentarse en un documento que registre la determinación a la que se llegue después de un análisis minucioso a partir de lo propuesto por el Titular del I. área que administra la información, cuyo análisis debe integrarse en la agenda de los asuntos a tratar en las sesiones, se insiste, a partir de las decisiones adoptadas previamente por los titulares de áreas y que son sujetas a control, en primera instancia, por el Comité de Transparencia. |
| d) Requisitos de fondo del acuerdo de clasificación. | Como se ha señalado antes, al hacer el juicio de subsunción o encaje entre el supuesto de hecho y la hipótesis jurídica, se debe acreditar la estricta correspondencia entre un elemento y otro. Ahora, en esta parte del procedimiento, que se desahoga en sede del Comité de Transparencia, la ley señala que la carga de la prueba, para justificar las restricciones, corresponde a los **Sujetos Obligados**, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación.  De lo anterior, se desprende que para una correcta **clasificación total o parcial**, esto es determinar los datos que se suprimen en las versiones públicas, es necesario fundar y motivar, de manera correcta, la clasificación; considerando que todo acto que la autoridad pronuncie en el ejercicio de sus atribuciones, debe expresar los fundamentos legales que le dieron origen y las razones por las que se deben aplicar al caso concreto.  Así, en un acto de autoridad se cumple con la debida fundamentación cuando se cita el precepto legal aplicable al caso concreto y la debida motivación cuando se expresan las razones, motivos o circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para adecuar el hecho a los fundamentos de derecho. De este modo, la persona que se sienta afectada pueda impugnar la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.  En ese mismo sentido, el numeral trigésimo tercero fracción V de los Lineamientos Generales, precisa que para motivar la clasificación se deben acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar.  Ahora bien, **para cada caso además de fundar y motivar**, se debe identificar con claridad que datos contenidos en las documentales que son susceptibles de suprimirse, por ejemplo; Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), claves de seguros, préstamos o descuentos personales, secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, entre otros. |
| e) Condiciones especiales de la clasificación de la información como confidencial. | Los artículos 148 y 120 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, establecen que aun tratándose de datos personales, se podrán proporcionar, incluso sin solicitar el consentimiento de su titular.  En el caso de lo señalado en la fracción IV, será el Instituto quien deba aplicar la prueba de interés público, considerando también que como recientemente ha discutido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los servidores públicos nos encontramos sujetos a un régimen menor de protección.  Pero si la información que se pretende clasificar como confidencial no se encuentra en los supuestos de los artículos señalados y es posible, se deberá consultar al titular de los datos si permite o no el acceso. De no ser posible, la realización de la consulta, procede, fundando y motivando, la clasificación. |

1. Entre los datos personales que se localizan en el documento que se ordena entregar, se encuentran la fotografía y la firma de los servidores públicos, por lo que se analizará si procede su clasificación o, si por el contrario, su publicidad.
2. **Fotografía de servidores públicos**: es preciso señalar que estas dan cuenta de las características físicas de los servidores públicos; por lo que, no debe perderse de vista que la imagen personal es la apariencia física, la cual puede ser captada en dibujo, pintura, escultura, fotografía, y video; la imagen así captada puede ser reproducida, publicada y divulgada por diversos medios, desde volantes impresos de la forma más rudimentaria, hasta filmaciones y fotografías transmitidas por televisión cine, video, correo electrónico o Internet.
3. Así, dichos datos constituyen la reproducción fiel de las características físicas de una persona en un momento determinado, por lo que representan un instrumento de identificación, proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual; lo que en el presente caso, acreditaría e identificaría a una persona como servidor público, por lo que es posible advertir que existe cierto interés público, cuando la fotografía obra en documentos de servidores públicos vinculados con el cumplimiento de disposiciones legales.
4. Por lo anterior, cuando las fotografías de los servidores públicos obran en documentos que dan cuenta del cumplimiento de funciones, requisitos legales o los acredita como servidores públicos, no puede ser clasificado como confidencial, pues en este caso, es superado por el interés público de conocer si en realidad, la persona que se ostenta en carácter de servidor público, se encuentra en ese encargo, si realiza las funciones o si cumple con los requisitos legales; sin que se considere como factor diferenciador para determinar la publicidad o clasificación el cargo o nivel jerárquico en el que se desempeñe el servidor público.
5. Conforme a lo anterior, las fotografías de servidores públicos sin importar el nivel o rango guardan la naturaleza de públicas (con excepción del personal operativo en materia de seguridad) y no procede su clasificación, en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo que en las versiones públicas que se ordenen, no podrá clasificarse esa información.
6. Además, no escapa de la óptica de éste órgano garante que el documento que da cuenta de lo requerido es un título o cédula profesional, por lo que resulta conveniente traer a contexto el criterio 001/2013 y 015/2017 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuyo rubro y contenido son los siguientes:

***Fotografía de una persona física que conste en su título o cédula profesional no es susceptible de clasificarse con carácter de confidencial.*** *La fotografía contenida en un título o cédula profesional no es susceptible de clasificarse con el carácter de confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, no obstante ser un dato personal, en virtud del interés público que existe de conocer que la persona que se ostenta con una calidad profesional determinada es la misma que aparece en los documentos oficiales de referencia. Lo anterior es así, ya que en el momento en que una persona se somete a un registro fotográfico con el objetivo de recibir una identificación oficial que lo avala como profesionista, consiente que tanto la imagen de su rostro como su nombre y profesión, sean elementos de acreditación e identificación frente a terceros.*

***Fotografía en título o cédula profesional es de acceso público.*** *Si bien la fotografía de una persona física es un dato personal, cuando se encuentra en un título o cédula profesional no es susceptible de clasificarse como confidencial, en virtud del interés público que existe de conocer que la persona que se ostenta con una calidad profesional determinada es la misma que aparece en dichos documentos oficiales. De esta manera, la fotografía contenida en el título o cédula profesional es pública y susceptible de divulgación.*

1. Resultando así que, la fotografía de los servidores públicos, cuando obre en título o cédula profesional es de acceso público y no procede su clasificación como información confidencial, aún y cuando corresponde a un dato personal.
2. **Por lo que corresponde a la Firma**: En relación con la firma, ésta es considerada un dato personal concerniente a una persona física identificada o identificable, al tratarse de información gráfica a través de la cual su titular exterioriza su voluntad en actos públicos y privados.
3. Ahora bien, aún y cuando la firma en cuestión sea de un servidor público, se advierte que en los documentos que tuvo a la vista este Comité, ésta no fue estampada en virtud de actos que se realizan por sus atribuciones, por lo que son susceptibles de clasificación como lo consideró el INAI en su resolución RRA 7562-17.
4. Respecto de este dato, resulta aplicable a contrario sensu el Criterio 10/10 del entonces IFAI, hoy INAI, en donde señala lo siguiente:

*“****La firma de los servidores públicos es información de carácter público cuando ésta es utilizada en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público.*** *Si bien la firma es un dato personal confidencial, en tanto que identifica o hace identificable a su titular, cuando un servidor público emite un acto como autoridad, en ejercicio de las funciones que tiene conferidas, la firma mediante la cual valida dicho acto es pública. Lo anterior, en virtud de que se realizó en cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Por tanto, la firma de los servidores públicos, vinculada al ejercicio de la función pública, es información de naturaleza pública, dado que documenta y rinde cuentas sobre el debido ejercicio de sus atribuciones con motivo del empleo, cargo o comisión que le han sido encomendados.” (Sic)*

1. Si el servidor público incumple con estas formalidades y entrega la información sin proteger los datos personales incumple con lo que estipula las disposiciones legales establecidas, asimismo que si entrega un documento testado sin el debido acuerdo de clasificación.

# **R E S O L U T I V O S**

**PRIMERO.** Resultan fundadas lasrazones o motivos de inconformidad hechos valer en el recurso de revisión **10483/INFOEM/IP/RR/2022** en términos del **Considerando** **CUARTO y QUINTO** de la presente resolución.

**SEGUNDO.** Se **MODIFICA** la respuesta y se **ORDENA** al **Instituto de Salud del Estado de México** entregar víaSistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX**, de ser el caso en versión pública, los documentos donde conste la siguiente información:

1. **Actividades realizadas por la Subdirección de Infraestructura en Salud, del periodo correspondiente del uno (1) de enero de dos mil veintiuno al dos (2) de mayo de dos mil veintidós.**
2. **Grado de estudios del Subdirector de Infraestructura en Salud al dos (2) de mayo de dos mil veintidós;**
3. **Horario y días de labores del Subdirector de Infraestructura al (2) de mayo de dos mil veintidós.**

Para efectos de lo anterior se deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia en términos de los artículos 49 fracción VIII y 132 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que será suprimidos o eliminados dentro del soporte documental respectivo objeto de las versiones públicas que se formulen y se pongan a disposición del **RECURRENTE**.

**TERCERO. NOTIFÍQUESE** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del **plazo de diez días hábiles**, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley  de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO. Notifíquese** al **RECURRENTE** la presente resolución a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).

**QUINTO.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el Sujeto Obligado de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**SEXTO.** Se hace del conocimiento de **RECURRENTE** que, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en caso de que considere que la resolución le cause algún perjuicio podrá impugnarla vía juicio de amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA; Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA EMITIENDO VOTO PARTICULAR; EN LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL OCHO (08) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 13. [↑](#footnote-ref-1)
2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo sexto, sección A, fracción I. [↑](#footnote-ref-2)
3. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C. No. 151. Párr. 86. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibídem. Parr. 87. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Artículo 9. …

   II. Eficacia: Obligación del Instituto para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información;

   … [↑](#footnote-ref-5)